



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

4-12-2017

§: 10

## SALA PLENA

8

<b>SENTENCIA:</b>	86/2017.
<b>FECHA:</b>	Sucre, 13 de marzo de 2017.
<b>EXPEDIENTE:</b>	916/2013.
<b>PROCESO:</b>	Contencioso Administrativo.
<b>PARTES:</b>	Empresa Distribuidores del ORIENTE S.R.L. "DICOM" contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
<b>MAGISTRADO RELATOR:</b>	<u>Pastor S. Mamani Vilca.</u>

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Distribuidores del Oriente "DICOM", contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

**VISTOS EN SALA PLENA:** La demanda contencioso-administrativa de fs. 32 a 37, en la que se impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0917/2013 de 1 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); providencia de admisión de fs. 51, la contestación de fs. 77 a 79 vta., los memoriales de réplica y dúplica de fs. 103 a 104 y 108 a 108 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

### I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

En mérito al Testimonio Poder N° 260/2013 de 24 de julio de 2013, la Sra. Hilda Ramos en representación legal de la Empresa Distribuidores del Oriente S.R.L. (DICOM), mediante memorial de fs. 32 a 37, se apersonó e interpuso demanda contencioso-administrativa en contra de la AGIT, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0917/2013 de 1 de julio, notificada el 5 de julio del mismo año, como efecto del Recurso de Alzada interpuesto en contra de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio, por lo que haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la Resolución impugnada, expresa que:

#### I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Manifiesta, que como resultado del operativo denominado "CUCARACHA" realizado el 17 de mayo de 2011, la Administración Aduanera (AA) emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11, notificada el 20 de julio de 2011, contra la cual presentó descargos que demuestran la legal importación y compra en territorio nacional de la mercancía comisada.

Posteriormente, en fecha 19 de octubre de 2011, se notificó a la Empresa DICOM con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-134/11, en la que se declaró PROBADA la contravención aduanera de contrabando respecto a los ítems: 1, 2, 4(en parte), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Esta Resolución administrativa fue impugnada bajo el fundamento de que las

DUI's presentadas como descargos no fueron valoradas por la AA debido a que fueron legalizadas por la misma empresa y no así por la Agencia Despachante de Aduanas (ADA); como resultado de esta impugnación la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0122/2012, resolviendo ANULAR la Resolución Administrativa impugnada, e instruyendo a la administración aduanera fundamentar con antecedentes de hecho y de derecho, la forma en que fueron evaluados los descargos de la empresa recurrente, argumentando que la AT no valoró las pruebas por un simple formalismo (legalización) vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa, ya que por jerarquía normativa correspondía aplicar primero la Constitución Política del estado (CPE) y luego la Resolución de Directorio (RD) N° 01-003-11.

En fecha 27 de junio de 2012, la AA emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, ratificándose en el comiso dispuesto anteriormente, contra ésta resolución la empresa DICOM interpuso nuevamente Recurso de Alzada solicitando esta vez la Nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, impugnación que tras los trámites de rigor concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2012 notificada el 24 de octubre de 2012, que resolvió REVOCAR PARCIALMENTE la resolución impugnada, dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15 y 19 a favor de DICOM.

Contra esta Resolución, tanto la Administración Aduanera como la empresa DICOM, interpusieron Recurso Jerárquico, instancia en la que la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico resolviendo ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que no se pronunció sobre la diferencia existente entre el Acta de Intervención Contravencional y la Nota de Transferencia emitida por la empresa, aspecto invocado como causal de nulidad.

En cumplimiento a lo dispuesto por la AGIT, la ARIT La Paz emitió nueva Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2013 de 1 de abril de 2013, ratificándose en sus conclusiones anteriores y resolviendo nuevamente REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, dejando sin efecto el comiso de los ítems ya mencionados. Contra esta la AT interpuso Recurso Jerárquico, en virtud al cual la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0917/2013 resolviendo REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firme el acto administrativo impugnado en su integridad y subsistente el comiso de los ítems: 1, 2, 4 (en parte), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tras esto, DICOM presentó memorial de solicitud de enmienda el cual fue respondido mediante el Auto Motivado AGIT-RJ 0088/2013, notificado el 24 de julio de 2013.

## **I.2. Fundamentos de la demanda.**

Señala, sobre la posición asumida por la ARIT, que esta obró correctamente buscando la protección del derecho a la defensa y seguridad jurídica, considerando el Principio de la verdad material frente a la verdad



*Estado Plurinacional de Bolivia*

*Órgano Judicial*

Exp. 916/2013. Contencioso Administrativo.- Empresa Distribuidores del ORIENTE S.R.L. "DICOM" contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

formal. Efectúa luego análisis sobre la posición de la AGIT y los fundamentos expuestos en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0917/2013 de 1 de julio, detallando los siguientes agravios:

**A. Omisión en la valoración de descargos.-** Considera, que no es válido lo argumentado por la AGIT cuando refiere que al no haberse presentado las facturas comerciales que respaldan las DUI's no se puede verificar la correcta importación de los ítems mencionados, cuando en virtud a las facultades concedidas en los arts. 200 y 210 de la Ley N° 2492 del Código Tributario boliviano (CTb), la AGIT pudo requerir la presentación de la misma a cualquiera de las partes, sin embargo se limitó a tomar en cuenta sólo lo vertido por la Aduana, sin realizar un análisis objetivo y responsable sobre la verdad de los hechos, incumpliendo los principios de verdad material, oficialidad e informalismo.

**A.1. De la presentación de la prueba en materia tributaria y administrativa.-** Transcribiendo los arts. 76, 77.I y 81 de la Ley N° 2492 CTb, 47 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y 2 del Decreto Supremo (DS) N° 28138, todos estos referidos a la prueba en materia tributaria y administrativa, y el último respecto a la aceptación de fotocopias simples en reemplazo de las fotocopias legalizadas exigidas para la gestión de trámites ante las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. Al amparo de esta normativa denuncia que la AA debió compulsar la prueba presentada, más aún cuando es ella quien posee los originales para corroborar la información, asimismo observa que la aludida RD sólo dispone que debe presentarse el original o copia legalizada, pero no especifica quien es la persona autorizada para la legalización, ni tampoco impetra que sea la ADA quien deba legalizarla. En consecuencia al amparo del principio constitucional aquello que no está prohibido está permitido, al ser la empresa DICOM la tenedora de los originales, procedió a la legalización de las copias presentadas, agregando que conforme lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 2341, el técnico aduanero al ser el poseedor de los originales debió cotejar la información contenida en las mismas incluso si estas no se hubieran presentado.

Invocando el art. 1311 del Código Civil (CC), señala que la AA en ningún momento desconoció expresamente que los documentos presentados por memorial de 25 de mayo de 2011, no sean idénticos a los originales.

**A.2. Prelación Normativa en el Derecho Tributario.-** Indica, que la AA aplicó erróneamente la prelación normativa dispuesta en el art. 5 de la Ley N° 2492 CTb, otorgando mayor valor a la RD 01-003-11 que a lo señalado incluso por la CPE y por las leyes N°s 2492 CTb y 2341 LPA, pues por no cumplir una formalidad establecida por ley de orden interno y administrativo, no consideró la prueba de descargo, aspecto que fue validado por la AGIT, que en una forzada interpretación del contenido de la RD, no valoró las DUI's originales presentadas en etapa recursiva.

Bajo esta prelación normativa, los derechos del administrado de no presentar pruebas que estuviesen en poder de la administración actuante, tiene aplicación preferente a una exigencia administrativa, desvirtuando la pretensión de la AGIT de quitar el valor legal de la prueba presentada, sólo porque debía ser legalizada por la ADA.

**A.3. Principio de Verdad Material.-** Conforme señala el Art. 74 de la Ley N° 2492 CTb, indica, que es prioritaria la aplicación de los principios de derecho administrativo dentro del proceso de Verificación y Control. Por su parte el art. 4 de la Ley N° 2341 LPA describe el Principio de verdad material, en atención al cual se evidencia que la empresa aportó oportunamente prueba consistente en documentos fehacientes (DUI's), que confirman que la mercadería fue en su momento importada conforme a la Ley N° 1990 Ley General de Aduanas (LGA) y demás normas reglamentarias.

### **I.3. Petitorio.**

Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución impugnada y en consecuencia se confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2013.

## **II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.**

La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 29 abril de 2014, cursante de fs. 77 a 79 vta., bajo los siguientes argumentos:

**II.1.** Sobre los vicios de nulidad en la Vista de Cargo [Acta de Intervención Contravencional], sostiene que el Informe Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCR/791/2011 determinó que la documentación presentada por el sujeto pasivo no fue considerada como prueba de descargo en virtud a que las copias de las DUI's presentadas el 26 de mayo de 2011, cuentan únicamente con sellos del logo de la empresa DICOM, sin firma, ni identificación del responsable autorizado para la legalización, y en el caso de la DUI C- 5912 de 6 de octubre de 2010, presentada al momento del comiso, es evidente que no corresponde a la mercancía incautada, debido a que la mercancía fue elaborada en fecha posterior a la de la DUI.

**II.2.** Respecto al valor probatorio de las fotocopias de las Facturas Comerciales, indica que conforme lo establecen el inc. a) del art. 217 de la Ley N° 3092 Complementario al CTb y la RD 01-003-11, para que surtan valor legal debieron ser presentadas en originales o debidamente legalizadas, aclarando que el DS N° 28138, se refiere a la posibilidad que tiene los administrados de presentar copias simples en reemplazo a las fotocopias legalizadas exigidas para la gestión de "trámites", siendo estos diferentes a los "procesos", como es el que realizó la AA en este caso, donde se requieren documentos con pleno valor probatorio, conforme dispone la norma.

Al amparo del art. 76 de la Ley N° 2492 CTb, establece que el recurrente tenía la obligación de respaldar su importación con la documentación probatoria correspondiente, sin embargo advierte que realizó la presentación de las DUI's originales recién en instancia recursiva, mas no presentó las Facturas Comerciales, ocasionando que la AGIT no cuente con documentación suficiente para verificar la correcta importación de los ítems cuestionados, puesto que la información que registra la DUI es



*Estado Plurinacional de Bolivia*

*Órgano Judicial*

Exp. 916/2013. Contencioso Administrativo.- Empresa Distribuidores del ORIENTE S.R.L. "DICOM" contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

genérica, e incumple lo establecido en el art. 101 del DS 25870 Reglamento a la LGA (RLGA), cuando dispone que la DUI deberá ser completa, correcta y exacta.

Con estos argumentos, refuta los fundamentos de la demanda, afirmando que la Resolución Jerárquica impugnada fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifica en todo y cada uno de los fundamentos de su Resolución.

## **II.2. Petitorio.**

Solicita, se declare improbadamente la demanda interpuesta por la Sra. Hilda Ramos en representación de la empresa Distribuidores del Oriente S.R.L., manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0917/2013 de 1 de julio, que emitió.

## **III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.**

A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:

**III.1.** El 17 de mayo de 2011, funcionarios del COA procedieron al comiso de la mercancía transportada en el camión con placa de control 661-LKC, observando que el conductor presentó la DUI C-5912 de 7 de octubre de 2010, siendo incongruente con la fecha de elaboración del producto "baygon" que es posterior (21 de noviembre de 2010), momento en el que además se presentó las DUI's C-5912, C-1664 y C-11255.

**III.2.** La empresa DICOM S.R.L., solicitó mediante memorial de 26 de mayo de 2011, la devolución de la mercancía de origen nacional, argumentando a su vez que el traslado de la mercancía restante se realizó cumpliendo con lo dispuesto en el DS 708 y adjuntó copias de la siguiente documentación: 1) Nota de transferencia, 2) Las DUI's C-5294, C-7067, C-7069, C-5572, C-9085, C-1664, C-5651, C-7409, C-34047, C-3037, C-3036, C-1019, C-438, C-11255 y C-688; y 3) las facturas número 10422, 10434 emitidas por Industria Cosmética Yama Bolivia S.R.L.

**III.3.** Advirtiendo la existencia de mercadería de origen nacional, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011, autorizando la devolución de las mismas. Sobre los ítems restantes, se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11, notificada el 20 de julio de 2011, otorgándole a la empresa DICOM el plazo de tres días para la presentación de descargos.

**III.4.** El 19 de octubre de 2011, se notificó a la empresa DICOM con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/134/2011, que declara probada la comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando, sobre los ítems 1, 2, 4(en parte), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, disponiéndose su comiso definitivo, e improbadamente el contrabando respecto a los ítems 3, 4 (en parte) y 5 con su consiguiente devolución.

**III.5.** En virtud al Recurso de Alzada presentado por el sujeto pasivo, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0122/2012 de 13 de febrero, resolviendo anular la Resolución que declara el contrabando, e instruyendo a la Administración Aduanera fundamentar con antecedentes de hecho y de derecho la forma en que fueron evaluados los descargos presentados por la empresa DICOM.

**III.6.** Dando cumplimiento a lo dispuesto por la ARIT, la AA emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, señalando que la documentación presentada no es susceptible de valoración en vista de que el sujeto pasivo no presentó las copias de las DUI's debidamente legalizadas conforme lo dispone la RD 01-003-11, ratificándose en su decisión de declarar probada la contravención aduanera de contrabando, disponiendo de forma idéntica el comiso determinado anteriormente.

**III.7.** La empresa DICOM interpuso Recurso de Alzada contra esta nueva Resolución, presentando en esta etapa recursiva los originales de las DUI's presentadas en el proceso administrativo como descargo, por lo que la ARIT realizando una nueva valoración de la prueba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0845/2012, en la que resuelve **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución Administrativa impugnada, dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, y 19 a favor de la empresa DICOM, manteniendo firme y subsistente el comiso de los ítems: 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21 y 22.

**III.8.** Ambos, la Administración Aduanera y el sujeto pasivo interpusieron Recurso Jerárquico en contra de la mencionada Resolución de Recurso de Alzada, concluyendo esta instancia con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0096/2013 de 28 de enero de 2013, que resuelve **ANULAR** la Resolución de Alzada, ordenando que la ARIT se pronuncie sobre la nulidad invocada por la empresa DICOM S.R.L.

**III.9.** En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico, la ARIT emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2013 de 1 de abril de 2013, en la que una vez considerada y desestimada la nulidad invocada por el sujeto pasivo, se ratificó en su decisión anterior y resolvió nuevamente **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012.

**III.10.** Ante este hecho, el 23 de abril de 2013, la AA interpuso Recurso Jerárquico contra la resolución de la ARIT, cuyo trámite concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0917/2013 de 1 de julio de 2013, que resolvió **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firme el acto administrativo impugnado en su integridad y en consecuencia subsistente el comiso de todos los ítems: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

#### **IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.**

De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 916/2013. Contencioso Administrativo.- Empresa Distribuidores del ORIENTE S.R.L. "DICOM" contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la Administración Tributaria.

Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales tributarias, principios que el **objeto de la controversia** se refiere a determinar: *Si la documentación presentada como prueba de descargo por el sujeto pasivo Declaraciones Únicas de Importación (DUIs), debieron ser susceptible de valoración o en su defecto desestimadas por no cumplir con las formalidades requeridas para su consideración.*

## V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

### V.1. Sobre el Principio de Verdad Material.

La CPE en su art. 180.I establece: *"La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, **verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez**".* Asimismo con relación al principio de verdad material la Ley 2341 LPA, en su art. 4, señala: *"La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: (...) d) Principio de verdad material: **La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil (...)***

Por su parte, el art. 200 de la Ley 3092 Complementario al CTb, señala: *"Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: **1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, (...)***

Conforme se evidencia en la normas transcritas el procedimiento administrativo se rige por el Principio de Verdad Material, en cumplimiento al cual la Autoridad Administrativa competente, tiene la obligación de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, debiendo a este efecto munirse de todos los medios probatorios necesarios, sean estos ofrecidos o no por las partes, con la finalidad de contrastar y evidenciar la veracidad de los argumentos esgrimidos en el conflicto, debiendo adquirir certeza de la realidad acontecida en cada caso, para que así con plena convicción y sustento pueda pronunciarse y dirimir el fondo de los procesos.

El tratadista Juan Carlos Cassagne, manifiesta: *"... En el procedimiento administrativo, el órgano que lo **dirige e impulsa** ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes".*

(Derecho Administrativo II- Abeledo-Perrot-Buenos Aires Argentina, pag. 321).

Así también ha interpretado el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto del Principio de Verdad Material en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 873/2014 de 12 de mayo, cuando en sus partes pertinentes, señala:

*"III.4. El principio de verdad material en procedimientos tributarios administrativos*

*(...)El principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, **incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes**, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones.*

*(...)Vinculado a este principio se encuentra el de **impulsión de oficio**, toda vez que por este principio, conforme se tiene mencionado en otras legislaciones, implica que 'el órgano administrativo impulsará el procedimiento en todos sus trámites, ordenando los actos de instrucción adecuados'.*

*(...)Del razonamiento precedente, se establece que no son conducentes con el contenido del principio de verdad material la pasividad de la administración que pretenda encontrar justificativo en la inactividad o negligencia de la parte, pues el principio de verdad material obliga: **1) A no limitarse únicamente a las alegaciones y demostraciones o probanzas del administrado; 2) A no descartar elementos probatorios con justificaciones formales, cuando se trata de hechos o pruebas que sean de público conocimiento, cuyo mínimo de diligencia obliga a la administración pública a adquirirlas o tomarlas en cuenta; 3) A no desconocer elementos probatorios aduciendo incumplimiento de exigencias formales como la presentación en fotocopias simples, sobre documentos que estén en poder de la administración o que por diferentes circunstancias éstos se encuentren en otros trámites de los que puede rescatarse y que la administración pueda verificarlos por conocer de su existencia o porque se le anoticie de ella.***

*(...)Por otra parte la verdad material establecida en la norma tributaria, está ligada a la sana crítica establecido en el art. 81 del CTB (...) concordante con el art. 77 y 215 del citado Código(...) A este respecto, el art. 88 del Decreto Supremo (DS) 27113 Reglamento de la LPA, concordante con el art. 201 establece: "Las autoridades administrativas que intervienen en el trámite realizarán las diligencias para la averiguación de los hechos que fundamentan su decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados de ofrecer y producir la pruebas que sean pertinentes. II. La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de **amplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda sobre la admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de la admisión y producción**". De lo que se colige que*





Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 916/2013. Contencioso Administrativo.- Empresa Distribuidores del ORIENTE S.R.L. "DICOM" contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

conforme **el principio de informalismo y favorabilidad**, siempre que exista duda sobre la admisión y producción se estará a favor de esta última.

*En ese marco, el principio de verdad material en el ámbito tributario, está vinculado con el principio de impulso de oficio y el de sana crítica, en virtud del cual, la prueba presentada debe ser valorada correctamente y no de manera arbitraria, expresando las razones por las que se concede o no eficacia probatoria a una determinada prueba, cuya admisibilidad y producción se sustenta en los principios de favorabilidad e informalismo; es decir, ante la duda razonable sobre las mismas, se debe aplicar la más favorable a éstas.*" (Las negrillas son nuestras).

En sujeción a los conceptos normativos, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, se advierte que en el caso de autos, la AGIT ha emitido su Resolución de Recurso Jerárquico en completo desconocimiento e inobservancia del Principio de Verdad Material, pues en total contradicción a lo amparado por este principio, ha rechazado la valoración realizada por la ARIT de la prueba presentada por el sujeto pasivo, consistente en copias simples de Declaraciones Únicas de Importación (DUI's), en razón a que no se encuentran debidamente legalizadas por autoridad competente como lo exige el art. 217 de la Ley 2492 CTb y RD N° 01-003-11; aspecto, que a pesar de haber sido subsanado por el sujeto pasivo con la presentación de los originales de las DUI's en etapa recursiva, ha sido nuevamente obviado por la AGIT, al calificar las mismas de insuficientes por no contemplar un detalle específico de las cantidades importadas y no adjuntar las facturas comerciales que respalden estas transacciones.

Ahora bien, bajo las amplias facultades conferidas por el art. 210 del CTb y en observancia del Principio de Oficialidad o Impulso de Oficio dispuesto en el art. 200 del mismo cuerpo legal, le correspondía a la AGIT (y a toda autoridad administrativa) desarrollar la actividad necesaria para verificar plenamente los hechos que sirvan de fundamento para sus decisiones, priorizando la averiguación de la verdad material sobre los formalismos procesales, siendo su obligación y responsabilidad no solo dirigir el procedimiento administrativo, sino instruir que se practiquen las diligencias adecuadas para obtener las pruebas que considere pertinentes a efectos de emitir un acto administrativo válido y debidamente fundamentado, en base a hechos y datos debidamente comprobados, todo esto además en resguardo del principio de seguridad jurídica.

En consecuencia, la legalización o cualquier otra formalidad exigida a una determinada prueba para que recién su contenido pueda considerarse digno de valoración, es totalmente contraria al Principio de Verdad Material, más aún cuando la autoridad ante quien se la presenta, es precisamente quien ha validado la misma y cuenta con todos los medios para verificar la veracidad de su contenido, como en este caso sucede con las DUI's, ya que al tratarse de importaciones tramitadas ante la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la AA pudo oportunamente contrastar el contenido de las mismas con los datos que figuran en sus registros informáticos o archivos documentales.

Lo propio ocurre cuando estas pruebas son presentadas ante instancias que se encuentran facultadas a solicitar la certificación de las mismas,

como es ahora el caso de la AGIT, quien durante la tramitación del proceso pudo solicitar a la AA, a la ADA o al mismo Importador, la remisión de la información complementaria necesaria para esclarecer los hechos a ser probados en este proceso, como ser: Las facturas comerciales. Se concluye entonces que para ambas instancias administrativas era accesible la verificación del contenido de las pruebas, sin embargo adoptaron actitudes negligentes al no realizar las gestiones necesarias para su comprobación, justificando sus resoluciones simplemente en la inactividad del administrado, en pleno desconocimiento de sus facultades y responsabilidades dentro del proceso.

## **V.2. Sobre la presentación de pruebas y la prelación normativa en materia tributaria.**

La Ley N° 2492 CTb en sus arts. 77 y 81, concordantes con los arts. 47 y 74 de la Ley 2341 LPA, establecen que en materia administrativa y tributaria podrán presentarse todos los medios de prueba admisibles en Derecho, señalando además que las mismas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de **pertinencia y oportunidad**, debiendo rechazarse **las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria**, en proceso no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de **su existencia** y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

En el presente caso la empresa DICOM S.R.L. presentó dentro del plazo establecido por Ley copias simples de las DUI's que amparan parcialmente la mercadería comisada, y posteriormente ante instancia recursiva presentó los originales de las mismas, situación que no fue objetada por la parte contraria, y al no haber sido valorada en instancia administrativa, esta documental fue compulsada en la Resolución de Recurso de Alzada, aspecto que fue refutado por la AGIT bajo el criterio de que la prueba no cumplía con las formalidades solicitadas y que su contenido no era preciso.

Ante esta situación, y considerando que los argumentos expuesto en el punto precedente, desestiman por completo las observaciones realizadas por la AGIT, se establece que al no contravenir la prueba presentada ninguna de las disposiciones normativas expuestas, fue correcta la interpretación de la ARIT quien efectuó la valoración de la prueba, al amparo del principio de verdad material inscrito en el art. 180 CPE, garantizando al administrado conforme lo dispone el art. 115 de la CPE, el acceso a la justicia y a un debido proceso.

## **V.3. Conclusiones.**

Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la AGIT al pronunciar la Resolución impugnada, incurrió en error, al no considerar los principios constitucionales que rigen al proceso administrativo, habiéndose identificado infracción y vulneración de derechos, acto sobre el que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 916/2013. Contencioso Administrativo.- Empresa Distribuidores del ORIENTE S.R.L. "DICOM" contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

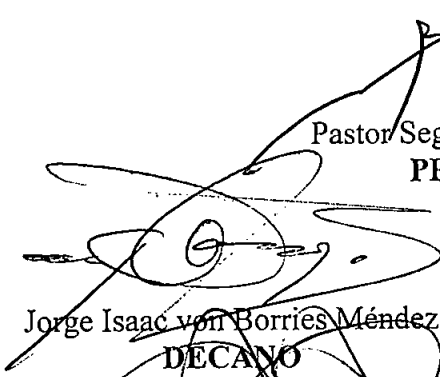
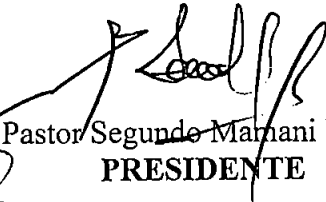
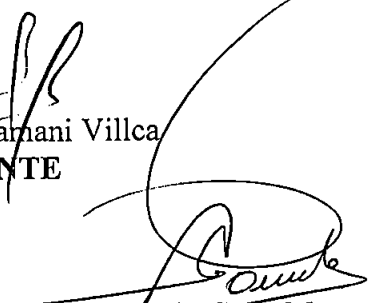
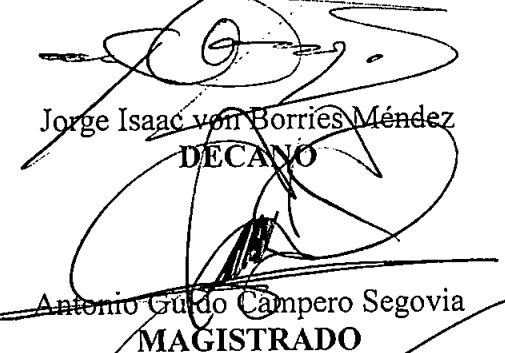
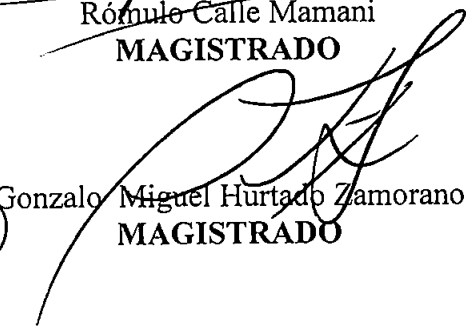
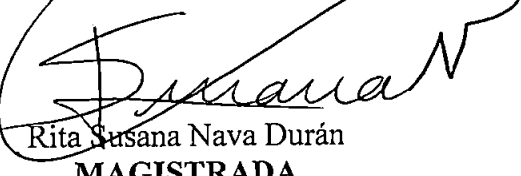

administrativa. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde enmendar el error y dejar sin efecto la Resolución impugnada.

**POR TANTO:** La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando **PROBADA** la demanda, consecuentemente se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0917/2013 de 1 julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, manteniendo firme y subsistente en todos sus términos y efectos la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2013 de 1 de abril de 2013.

No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.

**Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.**

*Regístrese, notifíquese y archívese.*

 Jorge Isaac von Borries Méndez <b>DECANO</b>	 Pastor Segundo Mamani Villca <b>PRESIDENTE</b>	 Rómulo Calle Mamani <b>MAGISTRADO</b>
 Antonio Guido Campero Segovia <b>MAGISTRADO</b>	 Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano <b>MAGISTRADO</b>	 Rita Susana Nava Durán <b>MAGISTRADA</b>
		 <b>NO ESTUVO PRESENTE</b> Norka Natalia Mercado Guzmán <b>MAGISTRADA</b>

Me Adhiero a la Disidencia

Fidel Marcos Tordoya Rivas  
**MAGISTRADO**

  
Sandra Magaly Mendiola Bejarano  
**SECRETARIA DE SALA PLENA**

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA  
ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA  
SALA PLENA

GESTIÓN: 2017

SENTENCIA N° 86 FECHA 13 DE MARZO

LIBRO TOMA DE RAZÓN N° 1/2017

MAG. MARITZA SANCHEZ MONTAÑO.

VOTO DISIDENTE:



MSc. Sandra Magaly Mendivil Bejarano  
SECRETARIA DE SALA  
SALA PLENA  
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

AT 2017/03/13